

**Freddy Esquivel**

Lic. en Trabajo Social  
Universidad de Costa Rica  
freddy.esquivel@ucr.ac.cr  
freddy.faessa@gmail.com

## **Neoliberalismo en Costa Rica: secuelas en la cuestión social durante el siglo XX**

---

### **Resumen**

El presente artículo expone algunas de las principales repercusiones en la "cuestión social" en Costa Rica a partir de la puesta en práctica de los planteamientos neoliberales durante el siglo XX. Se destaca el deterioro de las condiciones de reproducción material de una amplia población, así como el debilitamiento de ciertas formas de organización y representación política que caracterizó las luchas sociales de ese país.

### **Palabras claves**

neoliberalismo · cuestión social

### **Abstract**

This paper presents some major impact on the "social question" in Costa Rica from the implementation of neoliberal approaches in the twentieth century. Including the impact on living conditions and the weakening of some forms of political organization and representation that characterized the country.

### **Key words**

neoliberalism · social question

*“El breve siglo XX acabó en problemas para los cuales nadie tenía, ni decía tener, soluciones.*

*En cuanto tanteaban el camino para el tercer milenio en medio de la niebla global que se acercaba, los ciudadanos del fin-de-siglo solo sabían que lo que acababa era una era de la historia”*

Eric Hobsbawm

## Introducción

El modo de producción capitalista, histórica y estructuralmente, se ha reproducido por medio de crisis permanentes (Quesada, 2012:), entre ellas se puede destacar primigeniamente la acontecida entre 1873 a 1890 (Barral, 1999). Esas quedas requirieron de un elenco de replanteamientos para que la burguesía maniobrara legitimando el capitalismo como vía privilegiada para la sobrevivencia de la humanidad.

Por su lado, en el siglo XX se gestaron una serie de patrones que trataban de instaurar mecanismos y rutas para solventar esas precariedades; pasada la Segunda Guerra Mundial se crea un conjunto de órganos de expansión capitalista como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comandados por los Estados Unidos (Duque, 2011). Esas estructuras se articularon ulteriormente con las propuestas keynesianas de “pleno empleo” y Estado interventor, las cuales procuraban ampliar el consumo para compensar la capacidad productiva existente (Montoya, 2009).

En esa suma de desajustes apareció en las últimas tres décadas del siglo pasado, la línea comandada por los presupuestos neoliberales que se constituirían en una vuelta a los principios del libre mercado y Estado regulador; la lógica de estos referentes se pueden hallar en las obras de Hayek (1978) y Friedman (1996).

Sobre esos cambios se señala que “con el estallido de la primera crisis general del capitalismo posterior al fin de la segunda guerra mundial, ocurrida a mediados de los años '70, un primer acuerdo teórico altamente consensuado entre los estudiosos del sistema capitalista fue el siguiente: la época de oro del capitalismo de la posguerra (1945-1973), había llegado a su fin. La fecha exacta de este fin no es posible de precisar, ya que la productividad laboral había comenzado a declinar en los Estados Unidos desde fines de los años '60 y el fin de la convertibilidad oro-dólar decretado por Richard Nixon en 1971 antecedieron tanto a la primera crisis del petróleo como a la recesión de los años 74-75 (...) La profundidad y extensión de estas crisis o recesiones han sido variables, siendo muy extendidas las crisis del 73-75, la de 80-82 y la actual crisis global” (Mora, 2008:46).

Han pasado varias décadas desde que formalmente se entretendió la lógica neoliberal con las condiciones de reproducción de las sociedades latinoamericanas a fines de los años setenta del siglo XX. Esta época significó para las fracciones capitalistas una serie de apuestas a estrategias y tácticas que llevaron a perpetuar el modo de producción a costa de una sucesión de secuelas en la vida en el planeta.

Las devastaciones que se han evidenciado a lo largo de esos lustros dan cuenta de las más amplias variaciones en diversos aspectos de la vida del continente y de la manera en que se articulan los hilos de la globalización, orquestada por los organismos multilaterales y regionales de carácter financiero y político, al mando del capital transnacional (Bell y López, 2007).

Bajo esa inspiración indignante surge el presente artículo, con el propósito de analizar de manera retrospectiva algunas de las principales secuelas que socio-históricamente se entramaron con la “cuestión social” en la situación particular de Costa Rica en el siglo XX.

El tratamiento teórico que orienta el análisis está direccionado por un acento en el estudio ontológico del ser social, cuya categoría central es el trabajo, el cual le ha permitido alterar la naturaleza y a sí mismo en esa dialéctica e histórica relación (Lessa, 2000). De tal manera, el trabajo ha demostrado ser, históricamente, el puente de transformación material del ser humano, de su socialización, de su formación, de su reproducción.

Se ha definido el período neoliberal como marco de tratamiento para estos párrafos con el fin de poder recuperar las bases estructurales erigidas en el pasado, y que posibilitan una aprehensión más acabada de lo que día a día se coloca de manifiesto ante la caída de las bolsas de valores, las declaraciones de quiebra de los bancos, las burbujas inmobiliarias, las luchas en diferentes coordenadas del orbe contra el pauperismo y la especulación del costo de la vida, así como por el acopio necesario de fuerza humana para confrontar este momento de la historia.

### **La cuestión social en Costa Rica**

La nomenclatura “cuestión social” contiene una serie de determinantes cuya naturaleza está arraigada a las transformaciones de la modernidad, pero en especial en las alteraciones en el mundo del trabajo provocadas por la revolución burguesa en su expansión industrial (Netto, 2000). En letras de Yazbek (2000), la “cuestión social” trasluce como un conjunto de expresiones de luchas sociales ante las condiciones de vida de la clase trabajadora que reflejan la explotación y el pauperismo social.

Es evidente que la “cuestión social” refiere a la resistencia y lucha contra la explotación, que somete el modo de vida capitalista a la mayoría de la humanidad.

Aunado a ello se cita que la misma expresa desigualdades económicas, políticas y culturales de las clases sociales, mediadas por disparidades entre las relaciones de género, características étnico-raciales y formaciones regionales. Al mismo tiempo, coloca en lucha a amplios segmentos de la sociedad civil en el acceso de los bienes de la civilización (Iamamoto, 1995). Por tanto, se aleja de ser enfocada exclusivamente como desigualdad social entre pobres y ricos, mucho menos como “situación social problema”, que generalmente es reducida a dificultades del *individuo* (Iamamoto, 2000).

La “cuestión social” toma forma en determinadas condiciones de vida que se manifiestan en las grandes urbes europeas, su foco está en las mutaciones del mundo del trabajo, en un marco de mayor madurez de las sociedades occidentales industriales. La misma se forjó en condiciones particulares tales como:

1. Germina en un ámbito principalmente metropolitano.
2. Se interrelaciona con la vida material que se despliega alrededor de los parques industriales.
3. Encarnada en las posibilidades de reproducción existentes en concentraciones proletarias (empleadas, subcontratadas y sin trabajo).
4. Se perfila a partir de una plataforma de movilización política e ideológica, de extracto sindical y/o partidista.
5. Contiene una agenda de demandas y negociación permanente en materia de asistencia, seguridad, protección y atención social (laboral y salarial).
6. Está directamente coligada a luchas clasistas sistemáticas y permanentes, aunque con oscilaciones históricas a partir de las fuerzas sociales que la instituyen en definidas coyunturas.

Por su lado, el proceso de constitución, reproducción y manifestación de la “cuestión social” en Costa Rica ha sido poco estudiado desde perspectivas críticas, hallándose fundamentalmente un trato liberal y conservador (Villanueva, 1955; Soto, 1984; Botey, 1994).

Históricamente, desde la gestación de su independencia del imperio español, la economía de esta nación se había caracterizado por una estrecha dependencia a la agricultura de subsistencia, hallando en la exportación del café el principal medio de intercambio con el mercado internacional (Acuña y Molina, 1991).

La posterior llegada de enclaves comerciales asociados a la producción bananera y la construcción del ferrocarril a la costa atlántica, demandó la traída de extranjeros para compensar el escaso número poblacional necesitado de incorporarse a esas labores, y capaces de soportar las inclemencias de la naturaleza de esa geografía (Esquivel, 2007).

Jamaiquinos, chinos, italianos y personas provenientes de otros sitios de América Central, desfilaron entre esa gama de trabajadores (Fallas, 1983). Las condiciones de vida a las que eran sometidos poco retrasó la aparición de conatos de protestas y demandas de mejoras, sin embargo esas acciones eran inmediatas, poco sistemáticas y desarticuladas de alguna línea ideológico-política de lucha obrera (a excepción de los italianos que habían traído consigo experiencias anarquistas) (Aguilar, 1989; Salazar, 1993).

En el casco metropolitano del país, la avanzada de los cambios en el modo de vida derivó en alteraciones importantes en el trabajo artesano, tecnificándose, reorganizándose, especializándose y más adelante mecanizándose para la diversificación productiva (Fallas, 1983).

Las mudas señaladas a lo interno (en el área rural y urbana), como la presión internacional propio de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, provocaron una serie de giros que darían la arquitectura más precisa para el acaecimiento de la “cuestión social”.

De forma preliminar, es posible asentir que es a inicios del siglo XX donde se dilucida con más precisión la existencia de la “cuestión social” en suelo costarricense, ello a partir de los siguientes factores:

a) Para 1915 la población del Valle Central (Alajuela, San José, Cartago y Heredia) concentraba el 64% de habitantes del total del país; únicamente la capital tenía alrededor del 35%. En esas condiciones se desarrollaron los gremios de tipógrafos, ebanistas, carpinteros, albañiles y zapateros; sus antiguas sociedades mutualistas<sup>1</sup> se reorganizan en sindicatos o ligas de obreros (De la Cruz, 1997:22).

b) Las principales luchas de trabajadores/as propulsadas por una plataforma sindical y partidista se deslindan de órganos tales como el Partido Obrero Josefino (1913), el Partido Obrero de Grecia (1914), el Partido Obrero Conquista y Derecho (1920) y el Partido Reformista a cargo del General Jorge Volio (1920). Los mismos fueron seguidos por la fundación del Partido Comunista (1930) el cual aglutinó de manera más determinante las demandas sociales de las fracciones subalternas (Salazar, 1990:56).

c) San José se había constituido en la arena de puja, resistencia y negociación de las demandas de la población, en razón de que los barrios del sur de la capital habían condensado aquellas familias que emigraron de las zonas rurales por perder sus tierras, o bien porque necesitaban insertarse al trabajo asalariado

1 Las asociaciones mutualistas surgen en Costa Rica en el siglo XIX, las mismas son resultado de la acción de los propios obreros y artesanos; la primera que se instaló fue la *Sociedad de Artesanos en San José*, en el año 1874 y se mantuvo hasta 1882. En 1887 pasa a funcionar la *Sociedad de Auxilio Mutuo Nicaragüense*, y en 1889 se consolida en San José, la *Sociedad de Artes y Oficios*, seguida en ese año, por la *Sociedad de Artesanos el Progreso*, en la provincia de Alajuela. Este tipo de organizaciones no planteó demandas ante la clase patronal ni el Estado, ya que por medio de una caja de ahorros mutua trataban de solventar sus necesidades (Fallas, 1983: 58)

de pequeñas empresas de producción de bienes o servicios; o bien tratando de insertarse en la planilla de las instituciones del Estado.

d) Las primeras cuatro décadas del siglo XX<sup>2</sup> evidenciaron una crisis nacional, tanto en la base de su economía, fundamentalmente de monocultivo, como en la hegemonía política que se traía del pasado, articulada al ideario liberal; por tanto, tuvo cabida la puesta en negociación de un conjunto de regulaciones tales como la redacción de un Código de Trabajo (1943) y la promulgación de un decreto intitulado Garantías Sociales (1943), ambas velaban sobre la explotación del trabajo y la asistencia social (todo ello con participación de sectores de la oligarquía cafetalera, representantes de la Iglesia Católica y líderes comunistas).

e) Un viraje en la pugna de la direccionalidad política del país, conduce al liderazgo de la socialdemocracia posterior a la segunda mitad de ese siglo, impulsando una agenda de diversificación productiva y pseudo industrialización<sup>3</sup>, así como instrumentalizando las normas antes señaladas e incorporándolas en la Constitución Política de 1949.

f) La presencia del obrero proletario se evidencia con más nitidez en este período, y a ello se asocia la persecución sindical y partidaria, llegando a declararse ilegal el Partido Comunista o cualquier otra representación de la izquierda<sup>4</sup>.

g) Sin embargo, las organizaciones sindicales se mantienen y son el principal mecanismo de presión para las luchas venideras en este período, tal y como se aborda más adelante en este artículo.

En Costa Rica el contexto de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta se puede caracterizar por una lógica de “desarrollo hacia adentro”, llamada también de sustitución de importaciones, ampliación de las tareas del Estado para la reactivación de la economía y de la regulación de las relaciones sociales en un amplio espectro de intervención social.

Sin embargo, a pesar de existir una mejoría en la economía nacional, la “cuestión social” se mantenía efervescente, por ejemplo entre 1950 y 1960 el movimiento obrero tuvo bastante actividad: más de 68 sindicatos en acción, 107 conflictos colectivos, alrededor de 15 paros y 16 huelgas, 8 de ellas contra la Compañía Bananera de Costa Rica (Antes United Fruit Company) (Rojas, 1985:26).

Como se puede apreciar, el pasar de la vida campesina a la lógica de explotación artesanal, fabril y pseudo industrial no fue sencilla para el proletariado ni para sus familias, ya que significaba emigrar al Valle Central, postularse para

2 Debe señalarse que previo existían la Ley de Accidentes de Trabajo (1922), una Subsecretaría de Trabajo y Bienestar Social (1928) y una Subsecretaría de Higiene y Salud Pública (1928), todas ellas generadas en el marco del Estado Liberal (Esquivel, 2007:49)

3 Se escribe pseudoindustrialización ya que en este país el desarrollo industrial siempre fue marginal.

4 Entre los partidos ilegalizados de esos años estuvieron el Partido Nacional Democrático (1949), Partido Progresista Independiente (1953), Partido Unión Popular (1957), Partido Socialista (1962) y el Partido Acción Socialista (1970). De las organizaciones políticas de la época, debe recordarse que la más perseguida fue el Partido Vanguardia Popular (Salazar y Salazar, 1992:113)

la compra de su fuerza de trabajo –y vivir la frustración de ser descartado/a–, como así también de la obligación de insertarse en una lógica de explotación por tiempos, rutinas y producción, los cuales rasgos extraños en la vida cotidiana nacional. Junto a ello aparecía la presión de los patronos para la inmovilización asociativa y el debilitamiento de las centrales sindicales de carácter artesanal (Esquivel, 2008).

Aunque la expansión del capitalismo mejoró algunas condiciones de la economía, el desempleo y la criminalización de la “cuestión social” por la ausencia de alimentos o bienes, acompañó a la Costa Rica de esas épocas.

La organización sindical de quienes laboraban en el Estado empezó a germinar conforme éste se expandía. Entre los sectores más organizados se destacaron los del campo de finanzas, los cuales fundaron, en conjunto con quienes trabajaban en el Instituto Nacional de Seguros, la Federación de Empleados Bancarios. Luego aparecieron organizaciones tales como la Asociación de Empleados del Consejo Nacional de la Producción, la Unión de Empleados del Ministerio de Agricultura, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, el Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas y -quizás la más fuerte organización laboral- la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). Entre ministerios y organizaciones autónomas estatales existían 46 sindicatos, los cuales se vigorizaron con la promulgación de la Ley de Servicio Civil (1953) (Aguilar, 1989).

Los dos sindicatos de mayor cobertura nacional fueron la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum y la Confederación General de Trabajadores Costarricenses, los cuales tuvieron disputas ideológicas entre las diversas tendencias sindicales, especialmente entre los paradigmas de las orientaciones reformista, socialista y marxista-leninista. Es importante señalar que desde 1970 fracciones trabajadoras reactivaron su organización y lucha por mejorar sus condiciones de vida.

Para Rojas (1985), el incumplimiento de las promesas hechas en función de la reactivación de la economía en el contexto del Mercado Común Centroamericano llevó a generar malestar e inconformidad con las transformaciones societales surgidas en el país, especialmente en el sector agrícola, el cual vivía fluctuaciones importantes en los precios, afectando directamente a quienes los producían.

Por su lado, los trabajadores del área rural se vieron aquejados por las transformaciones del capitalismo, donde la capitalización industrial llevaba a establecer competencia por alcanzar beneficios para la estimulación de la inversión. Incluso, se tecnificaba el cultivo y se iba requiriendo menor mano de obra. En las zonas bananeras hubo estancamiento de las organizaciones de trabajadores como expresión del debilitamiento de los sindicatos de la Confederación General de Trabajadores (Salazar y Salazar, 1992).

Antes de finalizar este apartado, cabe anotar que la crisis germinada desde años atrás significó una disminución real del poder adquisitivo del salario, un aumento en el desempleo y el subempleo, un incremento en los precios de los artículos de consumo masivo y el crecimiento de una deuda externa, lo cual dejó un referente crítico para las relaciones establecidas entre el capital y el trabajo y, por consiguiente, de las manifestaciones de la "cuestión social".

En palabras de Lamamoto, "tales procesos introducen nuevas mediaciones históricas en la génesis y expresiones de la 'cuestión social', así como en las formas hasta entonces vigentes, de su enfrentamiento, sea por parte de la sociedad civil organizada o por parte del Estado, por medio de las políticas sociales públicas y empresariales, de los movimientos sociales y sindicales y demás iniciativas de la sociedad civil" (2000:113).

Así las cosas, se procede en este artículo a la exposición de los rasgos más generales de las principales condiciones de vida de los y las costarricenses que se logran apreciar desde inicios de la década de los años ochenta a los fillos del siglo XXI. También se retoman las expresiones de lucha, decaídas y alcances de diversas fuerzas sociales tanto civiles como trabajadoras, ante las coyunturas que se iban gestando en esos tiempos neoliberales.

### **Algunos elementos fundamentales del neoliberalismo del siglo XX en Costa Rica**

En la década de 1980, después de la crisis del modelo de capitalismo regulado, se sentaron las bases de un proyecto radical de globalización del mercado. El principio cardinal era la flexibilización laboral y financiera, así como descolocar al Estado de las tareas productivas y de intervención delegadas estratégicamente décadas atrás (Herr, 2011). Este planteamiento fue conocido principalmente en su versión para América Latina como Consenso de Washington (Salama y Valier, 1996).

Dicho Consenso arremetió entonces contra el Estado, bajo el argumento de que el sector privado gestiona más eficientemente los recursos en lugar del público, de tal manera que se debía situar como un mero facilitador de los negocios para brindar estabilidad, actuando como un regulador minimalista de los excesos del mercado (programas de alivio de la pobreza y del medio ambiente) y un garante de la paz social (gobernanza).

Además, se proclamó que las economías de los países debían internacionalizarse a toda costa, abrir sus fronteras al capital, atraer el máximo de inversión extranjera, tratar que la producción nacional salga al exterior y que las empresas transnacionales se penetren, generando que la presencia de polos de desarrollo y de élites prósperas desencadenaría un proceso de cascada de la riqueza



hacia las clases menos favorecidas conocida en aquellos años como “teoría del derrame” (Llistar, 2002:4).

Sin embargo, estos lineamientos, aunque mejoraron la macroeconomía de los países de América Latina, y en especial las exportaciones, sometieron a las naciones de la región a un concepto restringido de estabilidad que derivó en una falta de atención al papel que pueden cumplir las intervenciones de política en el sector productivo para inducir la inversión y acelerar el crecimiento. Sumado a ello provocaron una fractura importante entre las políticas económicas y sociales (adjudicando a las segundas un lugar subordinado) y también erosionaron prácticas democráticas de autodefinición de los pueblos con una estricta línea de sometimiento a esas reformas (Ocampo, 2006:7).

Al respecto también se puede anotar que “en realidad, las reformas que fueron la esperanza para los gobiernos al menos en América Latina, después de la ‘década perdida’, se aplicaron sin tomar en cuenta las especificidades de cada país. No sólo no se favoreció el fortalecimiento de los empresarios nacionales frente a la competencia foránea que invadió el sector industrial y financiero, sino que debilitó incluso las instituciones públicas (...) El resultado ha sido la inequidad en la distribución del ingreso, el desempleo y la disminución del consumo (...) No sólo son el ingreso, la educación, la esperanza de vida, el grado de analfabetismo, el acceso al agua, la salud y la nutrición, sino la falta de oportunidades de empleo y a un gasto más equitativo que financie el desarrollo y no el servicio de la deuda externa o los intereses de los mercados financieros” (Girón, 2008:56-57).

Ante esa disyuntiva, las directrices neoliberales tuvieron que reorientarse con un mayor tino de convencimiento para los pueblos de América Latina (fue crucial la Cumbre de las Américas de 1998, conocido luego como Consenso de Santiago), para ello se optó por incorporar en las agendas de reforma la consigna de que la mejora de los niveles de vida no dependen únicamente de la macroeconomía y se requería a su vez mejorar las políticas de educación, salud, desarrollo ecológico, profundización de la democracia y participación ciudadana en las decisiones gubernamentales (Casilda, 2005:15).

Siguiendo a Gallardo, se plantea que en esta coyuntura dichos procesos de democratización restrictiva, son enteramente circunstanciales, textualmente el autor escribe: “El conflicto entre una lógica mercantil que fragmenta y desmoviliza socialmente (bajo las fórmulas del ensimismamiento, la sobrevivencia y el ‘sálvese quien pueda’) y procesos de democratización que organizan y movilizan, se resuelven mediante la institucionalización de “democracias restrictivas” (Gallardo, 1996:22).

En el caso costarricense, ese conjunto de referencias hacia el neoliberalismo se caracterizó por:

- a) Regresión en la tendencia hacia la industrialización y la creación de empresas con participación del Estado.
- b) Reconversión en la base de la economía con acento en un abandono paulatino a la dependencia de la agricultura como soporte de su producción.
- c) Implementación de una política exterior que amplió los socios comerciales y la llegada de inversiones extranjeras directas.
- d) Incentivo de la rama de servicios para gestar un encadenamiento con las demandas de empresas transnacionales especialmente en áreas técnicas, tecnológicas, del sector financiero y turístico.
- e) Declive de las bases de la seguridad laboral y social, en función de generar una ampliación en la llegada de empleadores de la fuerza de trabajo, por medio de su abaratamiento y vulnerabilidad.
- f) Progresivos procesos de reducción de la planilla estatal, al amparo del argumento del déficit fiscal y la deuda externa.
- g) Disminución y reconversión de la inversión social, transitando de políticas sociales<sup>5</sup> de corte universal a focalizadas y selectivas (Esquivel, 2012:2).

Las medidas anteriores se confrontaron con las condiciones de vida de la sociedad costarricense, y las reacciones que los diferentes flancos de lucha social desplegaron, como también aconteció en otros territorios de la región centro-americana.

La convulsión nacional se matizó por un descontento relevante hacia muchas de esas líneas de “desarrollo nacional”, en tanto agravaban los entornos de reproducción, y erosionaban los alcances que la agenda social había posibilitado entre conquistas y concesiones desde mediados del siglo XX (Alvarenga, 2005:25).

La “cuestión social”<sup>6</sup> en este escenario de la historia proyectó una serie de cambios y rasgos relevantes que marcarían de manera diferenciada las relaciones sociales de dicho país.

### **Rasgos de las condiciones de vida en Costa Rica durante el siglo XX**

En el país, durante años '80 ya era innegable un deterioro de las posibilidades de reproducción de la clase trabajadora, desmontando modestos, pero diferen-

5 Estableciendo un concepto de la categoría política social, se parte de que esta es aprendida como una mediación constitutiva de la reproducción social, en estrecha relación con el modo de producción, el proyecto de Estado y de la sociedad a la que se está articulando. La política social es histórica y enlaza una diversidad de ámbitos de la cotidianidad, con relaciones conflictivas, por lo que es en sí misma un escenario de luchas de distinto origen y perspectiva (Esquivel, 2006: 30)

6 Se colocan comillas para hacer la diferencia al uso de esta expresión por parte de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica. Inclusive dicha Iglesia la reconoce en su *Encíclica Cuadragésimo Anno*, citándola como los problemas más arduos de la sociedad humana (Manrique, 1982: 53).

tes indicadores en comparación a las economías cercanas; léase al respecto: "...los niveles de desempleo se duplicaron, llegando a más del 9% de la población económicamente activa, comparado con niveles tradicionales inferiores al 5%; y la inflación pasó a niveles cercanos al 6% anual a más de 80% en 1982. La distribución del ingreso familiar se tornó más desigual, ya que la mitad más pobre de la población pasó de recibir un 52% a un 42% del total. En consecuencia, se estima que un porcentaje de familias costarricenses se vieron conducidas a condiciones de pobreza; y, lo que es aún más dramático, el porcentaje de familias viviendo en condiciones de pobreza extrema aumentó, en los mismos años, de un 15% a un 37%" (Garnier e Hidalgo, 1997:38).

La inflación y la especulación llevaron a que fracciones de la clase trabajadora fuesen las más afectadas, por reducirse su potencial de consumo, y de ahorro en el mejor de los casos (Salazar y Salazar, 1992:149)<sup>7</sup>.

Algunos otros datos sobre la condición de la clase trabajadora en el país para inicios de los años ochenta, según Aguilar y Ramírez (1989), fueron que alrededor de 41.000 se ubicaban en el llamado desempleo oculto y predominaba el autoempleo; el sector informal de la economía se incrementó convirtiéndose en la principal salida a esa crisis. En 1982 el 55% del total de la fuerza de trabajo estaba subempleada; entre 1980 y 1988 las contrataciones en el sector público se redujeron en un 5,6%, por otro lado el subempleo entre profesionales y técnicos aumentó del 14.6% en 1980 al 24.1% en 1982.

Por su parte el comportamiento del gasto social<sup>8</sup> con respecto al conjunto del sector público no financiero, sufrió una notable reducción, al pasar de 52% en 1980, a un 41% en 1985.

Según Trejos (2000), se puede afirmar que ante esas presiones se observó un debilitamiento del perfil de la política social marcada por una visión asistencialista y de focalización de la inversión social.

A su vez, se registró una pérdida del valor real de los salarios, la cual se sumó al incremento general de los precios, especialmente en aquellos de la denominada "canasta básica". La siguiente cita recupera de alguna manera la realidad de esos años: "Lo que se logró fue impresionante: un gasto declinante en educación y salud y en los subsidios a los productos básicos (...) La clase media se empobreció, los pobres cayeron en la indigencia y creció el sector informal (vendedores callejeros y otros)" (Molina y Palmer, 2002:102).

7 Prueba de ello, señala la anterior referencia, es que entre julio de 1979 y julio de 1982 el salario promedio del país sufrió un deterioro del 43% debido al proceso inflacionario.

8 La estructura porcentual del gasto público en el ámbito social se modifica a partir de 1987, cuando las esferas de la vivienda y la asistencia social, comienzan a tener mayor peso. A partir de 1986 éste experimentó un comportamiento inestable hasta alcanzar un 55% en 1992, en comparación con el 62% reportado para 1987 (Proyecto Estado de la Nación, 1994:134).

En 1986 se reconoce que quienes se encontraban debajo de la línea de la pobreza en el país correspondía a un 60% de las familias; a pesar de lo anterior para ese mismo año Costa Rica es calificada con un Índice de Desarrollo Humano<sup>9</sup>, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 0,916 (donde 1 es el nivel más alto), ocupando el lugar número 28 en 130 países en el mundo; dicho argumento propulsó a los gobiernos de turno para justificar sus acciones neoliberales (Reuben, 1995:25).

Avanzando las décadas, la extrema pobreza subió casi un 50 por ciento de 1987 a 1991, además aparecieron enfermedades ya erradicadas, y se elevó la expulsión escolar; por su lado el salario real se deterioró aún más por un alza dramática en los impuestos de venta y renta (Palmer y Molina, 2002:105).

Para 1995 los salarios mínimos y promedios disminuyeron, también el desempleo abierto fue de 5.2% lo que corresponde a 63.517 personas, que representaron 14.100 más que en 1994; el mismo seguía siendo más alto para las mujeres y la mayor cantidad provenían del comercio y los servicios (Proyecto Estado de la Nación, 1995:71).

Para 1996 se estima que 45.146 hogares en el país no lograron solventar sus necesidades alimentarias, y que 96.331 no satisficieron sus necesidades básicas no alimentarias, junto a ello: "Por segundo año consecutivo se dio un crecimiento en el porcentaje de hogares pobres que pasó de 20% en 1994 a 21.6% en 1996, tendencia que se acompaña con el incremento en el desempleo y la disminución en los ingresos reales. Este incremento se dio con más intensidad en el número de hogares bajo la línea de la pobreza extrema, en donde fue de un 19%, frente a un crecimiento de 3,5% en el número de hogares bajo la línea de pobreza básica" (Proyecto Estado de la Nación, 1996:60).

Para el año 2000 la pobreza total nacional se ubica en 21,1% de los hogares, medio punto porcentual por encima de 1999, y la pobreza extrema pasa de 6,7% en 1999 a 6,4% en el 2000<sup>10</sup> (Proyecto Estado de la Nación, 2001:51).

Costa Rica recibió el siglo XXI con una noticia que reflejaba, en los mismos términos que idearon los organismos internacionales (PNUD), el fracaso de sus políticas, ya que para el año 2000 descendió a nivel internacional según el Índice de Desarrollo Humano del grupo de países con "alto desarrollo humano" (puesto 45 en 1999) a las naciones con "desarrollo humano medio" (lugar 48 en el 2000),

9 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha promovido el concepto de desarrollo humano definido como el proceso de ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene como objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en su entorno social (López y Vélez, 2003:12)

10 Pasado ese año se agrega: (...) desde hace varios años la distribución del ingreso, los niveles de pobreza, subempleo y desempleo vienen mostrando pequeños deterioros anuales. El problema es que estas variaciones anuales se van acumulando, pues tienen el mismo signo (Proyecto Estado de la Nación, 2001:53)

lo cual refleja parcialmente el deterioro sistemático de las condiciones de reproducción que se fueron materializando en el siglo XX<sup>11</sup> (La Nación, 2000).

De tal manera, las posibilidades de vida que se fueron forjando en estas condiciones, deterioraron las posibilidades de existencia de gran parte de la población, socavando a su vez el patrimonio material que se había heredado de otras generaciones, tal y como ilustró en los apartados anteriores.

Sumado a ello las políticas sociales que se levantaban en el horizonte inmediato se perfilaron por ser básicamente acciones compensatorias y focalizantes, para atender a los filos más caóticos de la miseria, y que el mercado parece no dar solución; al respecto se subraya que "...podemos afirmar que consecuentemente las políticas sociales, en el actual contexto *neoliberal, global y productivo*, son substantivamente alteradas en sus orientaciones y en su funcionalidad" (Montaño, 1996:9).

Montaño recalca que la orientación de las políticas sociales en este marco histórico es alterada significativamente y dirigida a la privatización, focalización y descentralización; a su vez los servicios sociales, la asistencia estatal, los subsidios de productos de uso popular y los complementos salariales se ven fuertemente reducidos en cantidad, calidad y variabilidad.

La política social en el país estuvo condicionada en esos años a la crisis económica, con su economía dependiente, inflacionaria, deficitaria y endeudada; lo cual limitó las posibilidades de "redistribuir" socialmente el escaso crecimiento económico y por ende, hubo una contracción en la atención a la "cuestión social" por parte del Estado: "...la tríada privatización, focalización y descentralización se convierten en el eje de la receta que durante la mayor parte del decenio de los ochenta prescribieron los organismos internacionales como panacea a las dificultades fiscales y los costos que imponía el ajuste de la estructura productiva [en el país]" (Trejos, 2000:136).

Influyó mucho el concepto de que el Estado era solo subsidiario y no interventor, por lo que no debería ser benefactor o paternalista, lo anterior generó que se pensara que las manifestaciones de la "cuestión social", debían ser abordadas por las mismas personas y sus organizaciones locales.

Por tanto, es evidente que la contracción económica de los años ochenta tuvo efectos significativos en la vida cotidiana de las personas: "El hambre, la desocupación, la falta de vivienda digna y el aumento del costo de la vida, entre otros, se convirtieron en los temas obligados de discusión y análisis de las organizaciones

11 Para el 2001 el desempleo abierto se ubicó en el 6,8 por ciento, la cifra más alta desde el año 1985, cuando cerró en un 7,2%. Esto significa que de las 1.695.018 personas que eran parte de la fuerza laboral costarricense, 115.261 no tenían empleo fijo, además esta situación afectaba más a las mujeres que a los varones en términos porcentuales. El 7,7 por ciento de las mujeres en edad de laborar (45.884) no tenían trabajo, frente a 68.145 hombres (6,2 por ciento) sin un empleo fijo (La Nación, 2002, 10 de diciembre)

populares” (Aguilar y Ramírez, 1989:51). Sumado a ello, “la presión de los sindicatos y el movimiento comunal durante esos años, se orientó en gran parte hacia la política salarial y de precios y tarifas de servicios públicos” (Valverde, Castro y Román, 1990:64).

En esos momentos de enfrentamiento con las políticas de choque, citan los autores referidos, se dio una impactante movilización comunal, generada por la crisis económica en las barriadas urbanas que lleva a los pobladores a demandar de las organizaciones y dirigentes la defensa de sus condiciones de vida<sup>12</sup>.

Como ofensiva las administraciones de los años ochenta realizan un control y desarticulación del movimiento popular que condujo a un mayor deterioro en las condiciones de vida, ya que se obstaculizaron las posibilidades de presión y movilización que les había caracterizado en la década del setenta (Trejos y Villalobos, 1994:60).

Otra de las estrategias fue canalizar las organizaciones existentes a demandas que interesaban a los empresarios y gobernantes de turno para reactivar sectores de la economía tales como la construcción (y el precario empleo que ahí se expresa), por tanto se da una proliferación de organizaciones reivindicativas de vivienda<sup>13</sup>, cabe también distinguir: “La política en el campo de la vivienda se orientó a la construcción de 80.000 viviendas con las siguientes características (...) Una desarticulación del movimiento popular en el campo de la vivienda, ya que por un lado, algunos de sus dirigentes fueron integrados a las instituciones públicas y las organizaciones comunales fueron desmovilizadas y desintegradas, y por otro lado, los esfuerzos de los pobladores se concentraban en la construcción de las viviendas, con lo que se pierde la posibilidad de hacer trabajo organizativo (...) Una vez pasada la etapa de conseguir vivienda, se intenta disolver la organización comunal a través de una serie de medidas que dividen, generan desconfianza, dispersan y conducen a creer que las soluciones individuales son más fáciles que la organización comunal, etc. (...) el movimiento comunal se encuentra en una profunda crisis, y en aquellas comunidades en que se desarrolló el programa de vivienda, es prácticamente inexistente, y difícil de reactivar” (Trejos, 1994:79, 81 y 92).

12 Un ejemplo de ello es el siguiente: Los incrementos que se empezaron a aplicar dieron lugar a un descontento creciente de la población. Fue así como en el mes de junio de 1983, comunidades de diferentes lugares del país, con la participación de las asociaciones de desarrollo, decidieron bloquear las principales vías de acceso a la ciudad de San José y de otros lugares circunvecinos, bajo la consigna “yo no pago el recibo de la luz”. En esta oportunidad las asociaciones asumieron la organización y conducción del movimiento en distintos puntos del territorio nacional. Días después, los dirigentes llegaron a un acuerdo con el gobierno que comprometía a este último a no continuar aplicando aumentos en las tarifas eléctricas (Valverde, Trejos y Mora, 1993:10).

13 Donde tuvieron relevante protagonismo la “Coordinadora de Lucha por Vivienda Digna” dirigida por el Comité Patriótico Nacional (COPAN), el Frente Democrático de la Vivienda (FDV) y el Frente Nacional de Vivienda (FNV) (Zúñiga, 1998, p.23).

Por tanto, en las organizaciones locales las necesidades más apremiantes de vida provocaron que se adoleciera de la visibilidad política más amplia que trascendiera las ofertas gubernamentales, por ejemplo en materia de vivienda.

Al comprender la “cuestión social” entramada a las condiciones de lucha es evidente que los datos anteriores dan solamente una complejidad del asunto, por lo tanto seguidamente se profundiza sobre las formas de resistencia y articulación que se manifestaron en asocio con lo expuesto en este subapartado.

### **Las organizaciones trabajadoras (sindicalismo y solidarismo)**

Por el lado del colectivo sindical costarricense se habían logrado en años anteriores fuertes inclinaciones huelguísticas (especialmente en las zonas bananeras), aunado a ciertos frutos alcanzados por sectores de empleados públicos. Sin embargo, Contreras (1999) traza que en la década de los ochenta se inició un período de estancamiento y crisis del citado movimiento, aunque numéricamente no se percibía un declive<sup>14</sup>, tal y como se detalla en el cuadro n.1 (ver anexos).

Durante la década del '80 se observa básicamente la existencia de un sindicalismo público de carácter principalmente defensivo, que no avanza más allá de los límites de la tolerancia de la política estatal (Franceschi, 1989). Vale acotar, según Cardozo (1990), que la sindicalización de los trabajadores costarricenses no se relacionaba únicamente con los asalariados, puesto que existían varias organizaciones campesinas<sup>15</sup> como asociaciones, uniones, etc., que formaban parte de las centrales sindicales del país, lo cual robustecía y ampliaba un poco más la agenda de presión.

Siguiendo a Trejos y Villalobos (1994), en el período 1982-1986 el gobierno se les enfrentó a los sindicatos con una política represiva que conduce a su debilitamiento en el sector privado, también se fomenta el solidarismo<sup>16</sup> como antítesis de la lucha sindicalizada.

14 Entre las características del sindicalismo la fuente citada destaca que en 1986, de los 387 sindicatos que registraba el Ministerio de Trabajo, 195 estaban ubicados en la empresa privada y 192 en el sector público; de los 141.785 afiliados, 92.681 pertenecían al sector gubernamental y solamente 49.104 laboraban para empresas no estatales. En 1988 de los 354 sindicatos registrados, 153 se sitúan en el sector público, y únicamente 113 son del sector privado. Solamente 14.521 asalariados (as) de los 90.891 trabajan en empresa privada.

15 En relación al campesinado, sector de importancia en una economía que se había caracterizado por la agroexportación, se generó una agenda de protesta por la importación de productos que ya se cultivaban en el país, por la necesidad de disminuir los precios de insumos para trabajar la tierra, eliminar impuestos sobre la producción, apertura a crédito blando, acceso a terrenos de siembra, así como apoyo para el fortalecimiento de las instituciones del sector agrícola (Trejos y Villalobos, 1994:85). En el transcurso de 1987 y 1988, afirma la fuente anterior, las luchas de este sector fueron intensas, con muchos momentos de ruptura en el diálogo y de bloqueo de carreteras, ante la negativa del gobierno a cumplir con los acuerdos pactados.

16 Sobre este tipo de organización Molina y Palmer (2002:76) agregan: “El solidarismo es un tipo

El solidarismo había sido impulsado por las alas empresariales, y jamás en la historia se ha visto un sector social que dé crédito de manera sostenida durante muchos años a un proyecto, que no sea claramente beneficioso para sus intereses. Igualmente aunque se pueda disfrutar de una serie de reconocimientos a nivel económico y social, el aumento de la productividad y el clima de paz laboral que promueve, redundan en una mayor extracción de plusvalía (Valverde, Trejos y Mora, 1993:15).

Asimismo, en una época de contracción económica y de crisis social, en donde los sectores patronales tendieron a incrementar el margen de beneficios, se agudizó la pérdida de autonomía obrera con todo lo que eso significa, por lo que básicamente las asociaciones solidaristas fueron instrumentalizadas por los intereses patronales<sup>17</sup>.

Una muestra de las formas en que el sindicalismo y el solidarismo se desarrollaron en el país se expresa en el cuadro (n.2) (ver anexos), dando clara evidencia de que se constituyeron en un mecanismo que paulatinamente pudo erosionar la lucha trabajadora que caracterizó con una fuerte orientación de clase a los sindicatos.

Para 1996 el número de sindicatos activos, disminuyó en 8,3% en comparación al año anterior, igualmente las personas afiliadas se redujeron en un 3,7 %, por su parte las asociaciones solidaristas aumentaron en cantidad y afiliación, especialmente en la industria (Proyecto Estado de la Nación, 1997:75) (ver cuadro n.3, anexos<sup>18</sup>).

Adicionado a lo anterior, y según el Proyecto Informe Estado de la Nación (2000:263), durante más de una década Costa Rica ha sido objeto de diversas demandas de organizaciones laborales y sindicales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente por el incumplimiento de libertad sindical y del derecho de manifestarse en la empresa privada.

En los años que continúan los sectores sindicalizados son enfrentados al cierre de las posibilidades de negociación, en particular aquellos que no eran

de organización laboral, basado en un fondo ahorrado en cada empresa por los trabajadores y sus patronos (...) La expansión de tal corriente fue efímera en la década de 1950, pero treinta años después, en el contexto de la crisis, tuvo una difusión muy amplia en el sector privado, apoyada por los capitalistas y el Estado. El 7 por ciento de los convenios entre asalariados y empresarios se efectuó según este modelo de 1980, proporción que subió al 51 por ciento en 1986; y en 1994, existían en todo el país 600 sindicatos y 1.694 asociaciones solidaristas (con fondos por casi 47.000 millones de colones)".

17 Para recalcar esa tendencia, el gobierno de turno que empezó a comandar los compromisos con los organismos financieros internacionales a inicios de la década de los ochenta, se articula a la clase patronal para presentar ante la Asamblea Legislativa lo que hoy es la Ley N. 6970 que regula y consolida al Solidarismo desde el 28 de noviembre de 1984.

18 Cabe distinguir que para 1999 ambas organizaciones restan números en sus afiliados, pero aumentan las personas sindicalizadas (volviendo a perder adeptos el año siguiente), aunque disminuyen en las asociaciones solidaristas, repuntando en el 2000.



controlados por el partido en el gobierno (Liberación Nacional), por tanto ven reducida la atención a sus demandas.

Entre 1990 a 1994 se demuestra la poca fuerza sindical en la negociación salarial, permitiendo que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se llevaran a cabo en relación con la disminución en los pagos, el empleo y los empréstitos condicionados. Relacionado a lo anterior se elaboró un Plan de Movilidad Laboral para reducir el empleo en el sector público en 9.000 trabajadores.

Ante estas medidas los sindicatos expresaron su desacuerdo, se opusieron a los despidos y denunciaron estas acciones por medio de paros, huelgas, manifestaciones (Proyecto Estado de la Nación, 1995:64). Debido a estas presiones logran articular algunos esfuerzos de resistencia transformando el Plan de Movilidad en "voluntario" (De la Cruz, 1997).

A su vez, cita la fuente, en 1995 la Asociación de Empleados/as del Instituto Costarricense de Electricidad (ASEICE) logró que no se aprobaran los proyectos de transformación institucional con miras a la privatización, dicha organización se alió con distintos sectores sociales nacionales e internacionales que luchaban contra las presiones neoliberales.

En el año 1998 se denota una articulación de diversas fuerzas sociales que se hacen presentes en el Foro de Concertación Nacional con la representación de la Mesa Nacional Campesina, UPANACIONAL (también de representación agrícola), el Frente Agrario de Organizaciones Sindicales, el Comité Socio-laboral, el Movimiento Solidarista Costarricense (sector más crítico) y la Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos, teniendo como agenda las negociaciones salariales, la mejora de las condiciones de trabajo, la vigencia de las libertades sindicales en el sector privado y las reformas a la Ley 7.531 sobre pensiones. A su vez, se movilizan en oposición a la apertura de los seguros y telecomunicaciones en manos del Estado, la crisis fiscal, la injusta estructura tributaria y el precario presupuesto destinado para la salud y la educación (Proyecto Estado de la Nación, 1999:167).

Lo escrito anteriormente da prueba histórica de las transformaciones en el mundo del trabajo que generó el neoliberalismo en Costa Rica. Es notorio que erosionó las bases sindicales de décadas atrás, anteponiendo un contrapunto como lo fue el solidarismo, articulado a los intereses empresariales.

El bloque sindical fue sometido a pruebas entre el contubernio capitalista y de las fracciones políticas hegemónicas, sumado a las contradicciones de sus líneas ideológicas y organizativas, así como la legitimidad social que pudieron alcanzar en esos años.

Otra extensión de la "cuestión social" en el país fueron los partidos de izquierda, en tanto representación de las agendas de las fracciones trabajadoras; como se observará en el siguiente acápite, su presencia en las justas electorales en el período en estudio, fue definitivamente exigua.

## Partidos articulados a las fracciones trabajadoras

En lo que corresponde a la arena política, los llamados “partidos de izquierda” enfrentaron también los embates producidos por la fragmentación social que el neoliberalismo cercenó en las organizaciones sociales.

Después de que a los partidos de izquierda se les “levanta” la prohibición de participación electoral en los años setenta (tal y como se señaló al inicio de este artículo), se dio un cierto aumento de organizaciones pero “estos entraron en una fase de crisis, con la pérdida de apoyo electoral y de su presencia en el Congreso, producto de pugnas internas entre dirigentes y falta de unidad ideológica y política” (Salazar y Salazar, 1992:154).

Para las elecciones de 1978, señalan los anteriores autores, la izquierda comprendió que debía estar unida, para tener más apoyo electoral, e ir creciendo como una tercera alternativa frente al bipartidismo que se generó por parte de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

De tal manera, aparece la formación de la coalición Pueblo Unido (producto de la alianza de los partidos: Vanguardia Popular -Partido Comunista-, Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo), la misma: “...se propuso modificar el modelo económico costarricense con limitaciones a las actividades económicas de la burguesía nacional y de las empresas extranjeras; erigir un fuerte Estado interventor, para regular las relaciones laborales entre el obrero y el patrón, distribuir más equitativamente la riqueza nacional, y mejorar la condición de vida de los sectores asalariados. Pueblo Unido fue partidario de una economía mixta, que pudiera organizar la producción y satisfacer las necesidades básicas de los sectores desposeídos, a la vez que defendió los intereses de los sectores populares ante los efectos de la crisis en la economía nacional” (Salazar y Salazar, 1992:158).

Posteriormente, se fundó la Coalición Alianza Popular (unión de los partidos Frente Amplio Democrático y Vanguardia Popular), la cual se propuso estimular la producción y el desarrollo económico independiente, defender la soberanía y las riquezas naturales del país, así como fomentar la explotación agroindustrial, congelar el aumento de precios de artículos de primera necesidad, elevar los salarios para compensar el alto costo de vida, acrecentar la producción nacional y luchar por una reforma agraria, entre otros (Salazar, 1993:18).

Para 1990 la izquierda fue representada de manera fragmentada por tres partidos, a saber: Pueblo Unido, Progreso y Organización Socialista de Trabajadores (línea trotskista).

Para las elecciones de 1994 no se presentó en las presidenciales ninguna agrupación claramente clasificable de izquierda, solamente se evidencia la solicitud de votos para puestos de diputados por Vanguardia Popular; en 1998

concurrió el Partido Pueblo Unido ya no como coalición sino como partido independiente (Rovira, 2002:73).

Otra agrupación con orientación de izquierda que se gestó en este tiempo fue Fuerza Democrática, que aparece por primera vez en 1994 (Tribunal Supremo de Elecciones, 2002), pero posteriormente se disuelve.

Algunos datos históricos de los votos obtenidos por los partidos de izquierda a fines del siglo XX se localizan en el cuadro n. 4 (ver anexos), donde se detalla que el apoyo tanto para la presidencia como para la elección de diputados acaudalados por esta opción política descendió significativamente.

Es evidente que los efectos de las estrategias neoliberales que impactaron en las condiciones de vida, también se proyectaron en desmontar el limitado acervo de organización y músculo político que se había logrado tener desde décadas atrás en el país.

Caso similar se observa con los casi extintos partidos de izquierda, que si bien en algún momento de la historia local, por medio del Partido Comunista, posibilitaron reformas dentro del orden vigente, en el escenario finisecular ya señalado prácticamente se diluyen en el movimiento histórico de fuerzas.

## **A modo de cierre**

El estudio del siglo XX provee trazos explicativos vitales para la comprensión de las políticas neoliberales en América Latina y Costa Rica.

Las singularidades en que se gesta y reproducen dichas directrices permiten advertir que el neoliberalismo es una expresión heterogénea del capitalismo, lo que admite reflexionar la manera diversa en que se ha mimetizado en los diferentes países.

Ante esto la forma en que la “cuestión social” se había materializado en las sociedades previo al Consenso de Washington y sus derivados, es una de las consideraciones requeridas para su estudio; ello con el fin de poder lograr un balance de las agudizaciones y tensiones provocadas en su naturaleza.

Las condiciones de vida de amplias camadas sociales (con suma relevancia la clase trabajadora), así como el proceso que las mediatiza ante las exigencias del capital mundial, emplazan su aprehensión como resultante socio-histórica que se forja en las tensiones más amplias de las fuerzas sociales, y no únicamente como indicador de vida o desarrollo humano. De tal manera, una lectura que supere la inmediaticidad de lo cotidiano es una exigencia metodológica para analizar la “cuestión social” y poder descifrarla en su significado real.

Por otra parte, según lo expuesto en el artículo, las directrices que asintieron seguir los gobiernos de turno y que provenía de los organismos financieros internacionales, no sólo erosionaron las limitadas condiciones de reproducción

social inmediata, que se habían institucionalizado desde mediados del siglo XX en Costa Rica, sino que además debilitaron los mecanismos y soportes sociales como lo fueron determinadas políticas públicas con rasgos menos agresivos para la vida humana.

La malla de articulaciones que proveían un músculo de organización y lucha (con las contradicciones que las caracterizan), también fueron socavadas por la puesta en marcha de las exigencias neoliberales; la vía partidista de izquierda es quizás una de las más diezgadas, seguidas por otros movimientos sociales como el campesinado y los órganos sindicales.

La “cuestión social”, tal y como se evidenció, está constituida de complejidades que se articulan en determinadas coyunturas históricas, la forma en que el capital explota al trabajo y la barbarie que acompaña el panorama inmediato que inaugura el siglo XXI, exige por tanto adentrarse en estas concatenaciones con la finalidad de totalizar el análisis social que reclama para su comprensión.

## Anexo

### Cuadro N° 1

Costa Rica: Sindicatos y afiliación sindical  
(1979-1987) (Absolutos y porcentajes)

Año	Población ocupada	Población sindicalizada	Porcentaje población ocupada sindicalizada	Número de sindicatos
1979	697.556	94.927	14%	280
1980	722.398	106.432	15%	280
1981	719.662	113.423	16%	311
1982	746.492	123.251	17%	328
1983	-----	-----	-----	-----
1984	787.000	129.145	16%	316
1985	-----	-----	-----	-----
1986	800.000	138.583	17%	387
1987	912.094	114.232	-----	354

Fuente: Aguilar y Ramírez, 1989, p. 57

### **Cuadro N° 2**

Cantidad de asociaciones solidaristas y sindicatos en Costa Rica (1991-2000) (Absolutos)

<b>Año</b>	<b>Asociaciones solidaristas</b>	<b>Sindicatos</b>
1991	1.149	432
1992	1.251	423
1993	1.395	391
1994	1.404	387
1995	1.471	348
1996	1.481	319
1997	1.389	283
1998	1.398	279
1999	1.043	212
2000	1.058	205

Fuente: Elaboración propia según Proyecto Estado de la Nación, 2002, p.125.

### **Cuadro N° 3**

Cantidad de personas afiliadas a las asociaciones solidaristas y sindicatos en Costa Rica (1991-2000) (Absolutos)

<b>Año</b>	<b>Asociaciones Solidaristas</b>	<b>Sindicatos</b>
1996	170.406	165.075
1997	178.919	152.778
1998	188.239	137.998
1999	175.381	141.880
2000	185.342	132.855

Fuente: elaboración propia según Proyecto Estado de la Nación, 1999, p. 211.

## Referencias bibliográficas

ACUÑA, V y MOLINA, I. *Historia económica y social de Costa Rica (1750-1950)*. San José, Editorial Porvenir, 1991.

AGUILAR, M. y RAMÍREZ, V. "Crisis económica y acción sindical en Costa Rica (1980-1987)", en: *Revista de Ciencias Sociales* N° 44, San José, Universidad de Costa Rica, 1989. pp. 44-68.

AGUILAR, O. *La huelga de los Tútiles 1887-1889*. San José, EUNED, 1989.

ALVARENGA, P. *De vecinos a ciudadanos. Movimientos ciudadanos y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica*. Heredia, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005.

BARRAL, M. *Historia. El mundo contemporáneo Siglo XVIII, XIX y XX*. Buenos Aires, Estrada Editorial, 1999.

BELL, J. y LÓPEZ, D. "La cosecha del neoliberalismo en América Latina", en: *Revista Electrónica FLACSO*. Año enero-junio 2007, Volumen 2, Número 1, pp. 1-17.

BOTEY, A. "La República Federal (1823-1842)", en: GONZÁLEZ, P. (Comp.). *Desarrollo institucional de Costa Rica (1523-1914)*. San José, Universidad de Costa Rica, 1983.

CARDOZO, V. *Política Salarial del Estado Costarricense*. Heredia, EUNA, 1990.

CASILDA, R. *América Latina: Del Consenso de Washington a la Agenda del Desarrollo de Barcelona*. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. 28 de febrero del 2005. [En línea: 30/03/2010] Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/177/Casilda%20pdf.pdf>

MANRIQUE, M. *De apóstoles a agentes de cambio. El Trabajo Social en la historia latinoamericana*. Lima, Ediciones CELATS, 1982.

CONTRERAS, G. *Costa Rica: en la encrucijada neoliberal (1980-1997)*. San José, Editorial Alma Máter, 1999.

COSTA RICA. Proyecto Estado de la Nación. *I Informe del Estado de la Nación*. San José, CONARE, 1995.

COSTA RICA. Proyecto Estado de la Nación. *II Informe del Estado de la Nación*. San José, CONARE, 1996.

COSTA RICA. Proyecto Estado de la Nación. *III Informe del Estado de la Nación*. San José, CONARE, 1997.

COSTA RICA. Proyecto Estado de la Nación. *V Informe del Estado de la Nación*. San José, CONARE, 1999.

COSTA RICA. Proyecto Estado de la Nación. *VI Informe del Estado de la Nación*. San José, CONARE, 2000.

COSTA RICA. Proyecto Estado de la Nación. *VII Informe del Estado de la Nación*. San José, CONARE, 2001.

COSTA RICA. Proyecto Estado de la Nación. *VIII Informe del Estado de la Nación*. San José, CONARE, 2002.

COSTA RICA. Tribunal Supremo de Elecciones. Partidos Políticos Inscritos. Elecciones Nacionales 2002. San José, 2002.

DE LA CRUZ, V. *El sindicalismo en Costa Rica*. San José, Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1997.

DUQUE, A. "De Bretton Woods a la crisis", en: *Revista AFESE* N° 56. Quito, Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano, 2011. pp. 52-73. [En línea: 14/11/2012] Disponible en: <http://www.afese.com/img/revistas/revista56/woods.pdf>

ESQUIVEL, F. *Introducción al Trabajo Social: una breve guía conceptual y contextual*. San José, Editorial UCR, 2006.

ESQUIVEL, F. *Trabajo Social en Costa Rica. Del ideario liberal a su constitución en el reformismo*. San José, Editorial UCR, 2007.

ESQUIVEL, F. "Cuestión social y políticas sociales en el Estado Empresario: reflexiones para el Trabajo Social", en: *Revista Reflexiones*, Volumen 87, N° 1. San José, Universidad de Costa Rica, 2008. pp. 9-24. [En línea: 12/02/2012] Disponible en: <http://www.latindex.ucr.ac.cr/reflexiones-87-1/reflexiones-87-1-01.pdf>

ESQUIVEL, F. "Retrospectiva de la configuración primigenia de las políticas neoliberales en Costa Rica", en: *Revista Escenarios* N° 12, Buenos Aires, Espacio Editorial-Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata, 2012. pp. 25-33.

FALLAS, C. *Mamita Yunai*. San José, EDUCA, 1970.

FRANCESCHI, H. "Sindicalismo en el sector público: MOPT, auge y estancamiento (1979-1989)". Tesis de grado de la Licenciatura en Trabajo Social. San José, Universidad de Costa Rica, 1989.

FRIEDMAN, M. *Capitalismo y libertad*. Madrid, Editorial Rialp, 1996.

GALLARDO, H. "Neoliberalismo en América Latina". Ponencia presentada en el *I Congreso Universitario de Estudiantes de Trabajo Social*. San José, 1996.

GARNIER, L. e HIDALGO, R. *El estado necesario y política de desarrollo*. San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1997.

GIRÓN, A. "Fondo Monetario Internacional: de la estabilidad a la inestabilidad. El Consenso de Washington y las reformas estructurales en América Latina", en: LECHINI, G. (Comp.) *La globalización y el Consenso de Washington: sus influencias sobre la democracia y el desarrollo en el sur*. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008. pp. 45- 60.

HAYEK, F. *New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas*. Chicago, University of Chicago Press, 1978.

HERR, H. "¿Cómo lograr que un sistema financiero inestable funcione?", en: OIT. *Boletín Internacional de Investigación Sindical*, N° 3. Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, 2011. pp. 145-170

HOBBSBAWM, E. *Era dos extremos. O breve século XX. 1914-1991*. São Paulo, Editora Schwarcz, 2010.

HOBBSBAWM, E. *Historia del siglo XX*. Barcelona, Editorial Crítica, 1995.

IAMAMOTO, M. *O Serviço Social na contemporaneidade*. São Paulo, Cortez, 2000.

IAMAMOTO, M. O debate Contemporâneo do Serviço Social e a Ética Profissional, en: ADEODATA, D. *Serviço Social e Ética*. São Paulo, Cortez- CEFSS, 1995.

LA NACIÓN. "País desciende en desarrollo. Debilidades en educación e ingresos", en: Diario *La Nación*, San José, Costa Rica, 29 de junio de 2000. [En línea: 12/04/2010]. Disponible en: [http://www.nacion.com/l\\_n\\_ee/2000/junio/29/economia1.html](http://www.nacion.com/l_n_ee/2000/junio/29/economia1.html)

LA NACIÓN. "El desempleo subió al 6,8%", en: Diario *La Nación*. San José, Costa Rica, 10 de diciembre de 2002. Página 14 a.

LESSA, S. "Lukács: El método y su fundamento ontológico", en: BORGIANNI, E. y MONTAÑO, C. (Orgs.) *Metodología y Servicio Social*. São Paulo, Cortez, 2000.

LÓPEZ, L. y VÉLEZ, R. *El concepto de desarrollo humano: su importancia y aplicación en México*. México, PNUD, 2003.

LLISTAR, D. (2002). *El qué, el quién, el cómo y el porqué del Consenso de Washington*. ISBN: 84-7426-657-2. Julio, 2003. [En línea: 03/04/2011] Disponible en: <http://www.odg.cat/documents/publicacions/CW-David-NOV02.pdf>

MOLINA, I. y PALMER, S. *Historia Costa Rica*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2002.

MONTAÑO, C. "El Servicio Social frente al neoliberalismo cambios en su base de sustentación laboral". Ponencia presentada en el *I Congreso Universitario Internacional de Trabajo Social*. San José, 1996.

MONTOYA, C. "Keynes y neoclásicos: una propuesta para la salida de la crisis", en: *Revista Ciencias Estratégicas*, Volumen, 17, N° 27. Bolivia: Universidad Pontificia



Bolivariana, enero- junio 2009. pp. 89-104. [En línea: 02/11/2012] Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/1513/151312820008.pdf>

MORA, H. "Una reflexión introductoria sobre la actual crisis global y los límites del capitalismo", en: *Revista de Ciencias Económicas*, Volumen, 26, Nº 2. San José, Universidad de Costa Rica, 2008. pp. 45- 53.

NETTO, J. "Cinco notas a propósito da 'questão social'". Ponencia presentada em el VII ENPESSS. Brasil, 2000.

OCAMPO, Luis. "Más allá del Consenso de Washington", en: *Revista Economía UNAM*, Volumen 3, Nº 7. México, UNAM, enero-abril 2006. pp.7- 25. [En línea: 23/10/2012] Disponible en: [http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econunam/pdfs/07/02J\\_A\\_Ocampo.pdf](http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econunam/pdfs/07/02J_A_Ocampo.pdf)

QUESADA, R. "Las crisis económicas en el sistema capitalista. Prisma Latinoamericano: elementos para su historia", en: *Revista Pacarina del Sur*, Volumen, 4, Nº 13. octubre-diciembre 2012. [En línea: 12/10/2012] Disponible en: <http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/146-las-crisis-economicas-en-el-sistema-capitalista-prisma-latinoamericano-elementos-para-su-historia>

REUBEN, S. *Crónica de un Desajuste Social*. San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1995.

ROVIRA, J. (Comp.). *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*. San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 2000.

ROJAS, M. " El desarrollo del movimiento obrero en Costa Rica; un intento de *periodización*", en: *CAMACHO, D.* Desarrollo del movimiento sindical en Costa Rica. San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1985. pp. 13-31.

SALAMA, P. y JACQUES, V. *Neoliberalismo, pobreza y desigualdades en el Tercer Mundo*. Buenos Aires, Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas –CIEPP-, 1994.

SALAZAR, J. *Estado, política social y crisis económica en Costa Rica (1970-1990)*. San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1993.

SALAZAR, O. y SALAZAR, J. *Los partidos políticos en Costa Rica*. San José, EUNED, 1992.

SOTO, G. *La Iglesia costarricense y la cuestión social*. San José, EUNED, 1984.

TREJOS, J. "Reformas Económicas y Formación de Capital Humano", en: ULATE, A. (Comp.). *Empleo, Crecimiento y Equidad*. San José, CEPAL, 2000. pp. 131-198.

TREJOS, M. y VILLALOBOS, R. "Lo aparente y lo oculto del Ajuste Estructural", en: ALVARADO, H. (Coord.). *Del otro lado del ajuste*. Heredia, EUNA, 1994. pp. 57-135.

VALVERDE, J.; CASTRO, C. y ROMÁN, I. *Movimientos Sociales en Costa Rica 1980-1988*. San José, CEPAS, 1990.

VALVERDE, J.; TREJOS, M. y MORA, M. *Integración o disolución socio-cultural*. San José, Editorial Porvenir, 1993.

VILLANUEVA, J. *Reflexiones sobre la "cuestión social", el Estado y los contratos*. Tesis de grado de Licenciatura en Derecho. San José, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1955.

YAZBEK, M. "Políticas sociales y asistenciales: estrategias contradictorias de gestión estatal de la pobreza de las clases subalternas", en: BORGIANNI, E. y MONTAÑO, C. *La política social hoy*. São Paulo, Cortez, 2000. pp. 110-135.

ZÚÑIGA, C. "Reforma del Estado en Costa Rica y transformaciones institucionales durante la administración Arias Sánchez (1986-1990)", en: *Revista Ciencias Sociales* N° 81, San José, Universidad de Costa Rica, 1998. pp. 19-35.

Fecha de recepción: 2 de mayo  
Fecha de aceptación: 6 de octubre